



Es momento de darle rumbo al País

Por: Dra. Eneida Torres de Durand
Directora Ejecutiva
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

El año que está a punto de concluir ha sido intenso por la vorágine de errores y desaciertos en el manejo de los asuntos públicos que hizo crisis en el 2017 luego de las catástrofes naturales que nos afectaron. La desconfianza en nuestras instituciones se encuentra en una tendencia creciente que está provocando una desconexión peligrosa y preocupante entre la sociedad y las instituciones públicas que pone en riesgo la cohesión social y debilita las posibilidades de encaminar la recuperación del país. Si en materia de capacidades institucionales es incuestionable que estamos navegando sin brújula, podemos inferir que la ausencia de rumbo es total cuando hablamos de darle dirección a la sociedad.

La impostergable transformación que debe llevar a cabo el sector político y el sistema de gobernanza pública para afrontar los retos de la segunda década del tercer milenio son monumentales. Coincido con el amigo y colega Dr. Luis Aguilar Villanueva en su aseveración de que poner orden y dar rumbo a los países exige como premisa categórica poner en marcha una buena gobernanza, de un gobierno eficiente y una buena gestión administrativa. Dicho en otras palabras, “sin un andamiaje institucional y administrativo eficiente el legado social y productivo se encuentra huérfano y perdiendo pulso y energía”¹.

¹ Dr. Luis Aguilar Villanueva (2015). *Gobernanza, Políticas Públicas y Eficiencia Directiva de los Gobiernos*.

Deterioro de las capacidades y debilidades de la gobernanza

En Puerto Rico se percibe que desde finales de los 80' el país ha venido experimentando un deterioro en la capacidad de respuesta de los gobiernos a las necesidades de la sociedad por lo que hemos venido perdiendo capacidad de gobernabilidad. Cuando hablamos de gobernabilidad nos referimos a las competencias de un gobierno legítimo con sus facultades y recursos para dar respuesta a las demandas sociales y asegurar la estabilidad política, el desarrollo social inclusivo y el crecimiento económico sostenible.

La sociedad percibe que el país se encuentra como un barco al garete sin timonel ni rumbo en medio de la tempestad. Como no se sabe a dónde ir, y ante el peligro de naufragar los tripulantes buscan afanosamente la seguridad de algún puerto, no importa cuál, mientras esperan la aparición milagrosa de un capitán diestro o las cartas de navegación. Es importante que los ciudadanos reconozcan su responsabilidad de cogobernar, ejerzan su rol de fiscalizar la gestión pública y sean más cautelosos y sabios en la elección de sus gobernantes.

Ya desde la década de los 80' José Luis González en su ensayo *El país de los cuatro pisos*, el ensayo más revelador y polémico sobre la compleja problemática social y económica que continúa encarando el país, dejó planteado desde una perspectiva histórica y cultural las causas estructurales del deterioro institucional que hoy vivimos. En este sentido, desde el punto de vista de la gobernanza, lo que se observa es un decaimiento de la capacidad institucional donde no se percibe claridad y continuidad en la formulación e implantación de las políticas públicas, es decir las reglas de juego no son claras contribuyendo al deterioro político con altos índices de corrupción y de ingobernabilidad de la sociedad. Para atender esta situación es necesario revertir el desgaste institucional mediante el fortalecimiento de la transparencia y las estrategias de gobierno abierto y fortalecer las capacidades institucionales.

Desde la perspectiva de la gobernanza pública, el gobierno desempeña un papel central en la articulación en redes de actores sociales para darle dirección a la sociedad. De igual forma, la gobernanza pública como forma de gobernar reconoce que los gobiernos no son capaces por sí solos de dar respuesta a las demandas sociales y para ello necesitan de la cooperación de los diferentes sectores de la sociedad: los ciudadanos, el sector privado y las ONGs. Por su parte, la gobernanza requiere que reflexionemos sobre la importancia de poner al ciudadano en el centro de la formulación de las políticas públicas. Para ello es necesario construir viabilidad política para lo que se necesita una nueva visión de gobierno que incluya capacidades robustas y diversas dirigidas a articular una visión estratégica orientada al logro de resultados y competencias de gestión, diálogo, interacción, negociación y consenso para gobernar en redes. El gobierno no es sinónimo de gobernanza ni de gobernabilidad estos conceptos están

íntimamente relacionados, pero en la práctica son distintos (ver gráfico de interrelaciones).



Fuente: Dra. Eneida Torres de Durand (2013) Curso Gobernanza Pública y Corporativa

Confianza la base del buen gobierno

En lo que respecta al proceso de gobernar en Puerto Rico las pasadas semanas pasarán a la historia como unas nefastas para la credibilidad de nuestras instituciones. Hemos experimentado un nivel de desgaste en nuestras instituciones sin precedentes, que ha deteriorado la confianza de la sociedad en su gobierno. El cuestionamiento más reciente del manejo del caso judicial del destituido Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por parte de las agencias a cargo del sistema de justicia e integridad pública y la legislatura vuelven a poner de manifiesto las debilidades de las capacidades institucionales que viene enfrentando el país por décadas lo que ha empobrecido la prestación de los servicios públicos y ha hecho evidente la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas.

Resulta penoso que la aparente causa real de estas disputas se deba a instancias de conflicto engendradas por razones de índole política. Una vez más la partidocracia, el inversionismo político y los escándalos de corrupción continúan obstaculizando que se adelante una agenda pública clara y coherente para encaminar las reformas apremiantes que necesita el país y ha generado conflictos, cinismo y escepticismo. Ambos hechos

llevan a una clara erosión de la confianza de los ciudadanos en las principales instituciones del estado lo que produce crisis de confianza generalizada e incertidumbre que puede acarrear efectos nocivos para la democracia y la gobernabilidad. De igual forma, el colapso de agencias que componen el Sistema de Seguridad Pública (policía, ciencias forenses, bomberos y emergencias médicas) ha dejado al desnudo la incapacidad de prestar servicios esenciales a la ciudadanía. Más embarazoso aún resulta ser las alegaciones de empleados fantasmas en ambos cuerpos legislativos al presente bajo investigación bajo el Departamento de Justicia y las agencias federales. Como expuso Daniel Innerarity “hay muchos más manuales de cómo hacerse con el poder que libros acerca de qué hacer con él”.²

En este sentido, es cada vez más necesario que los ciudadanos recuperen la confianza en su gobierno y en sus instituciones para avanzar hacia la construcción de instituciones más abiertas, más confiables, más transparentes, más eficientes y eficaces, así como luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder adecuadamente a las demandas y aspiraciones de los ciudadanos. Restituir la confianza de las instituciones es un imperativo categórico para encaminar la prosperidad del país y la salud de la democracia.

Esto va a requerir resolver la disfunción institucional que enfrentan los partidos políticos en nuestro país. Estas instituciones han dejado de ser cause de soluciones y se han convertido en fuente de problemas. El papel privilegiado que han ocupado las instituciones políticas en nuestra sociedad les ha permitido, a nombre de la democracia, alterar todo el entramado institucional en beneficio de intereses particulares o del partido político. La falta de democracia interna y de transparencia externa es evidente, sin embargo, atenderla es insuficiente por lo que además se requiere que estas instituciones se replanteen cuál es su responsabilidad en la sociedad y erradiquen las malas prácticas de administrativas y de gestión que tanto daño le han hecho a la administración pública.

Es sarcástico y decepcionante que desde los poderes públicos nos estén mareando con discursos mediáticos que intentan destacar la buena obra de gobierno y, por otra parte, las debilidades de las capacidades institucionales, los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad siguen afectando la prestación de los servicios esenciales requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Los fondos destinados a la educación superior, las ciencias, la tecnología y la investigación que son las fuentes fundamentales de la innovación y los avances tecnológicos que a su vez determinan el fortalecimiento de la productividad y el crecimiento económico siguen enfrentando amenazas fiscales y la política pública transversal que debe conectar estos sectores no está clara y no es transparente.

La ciudadanía percibe grandes incoherencias entre las propuestas y el discurso de muchos actores políticos. Además, un sector considerable de las organizaciones públicas estatales y no estatales (ONGs, asociaciones, sindicatos y otros) no actúan con

² Daniel Innerarity (2015). *La política en tiempos de indignación*

verdaderas respuestas a las problemáticas sociales que sean producto de consenso ciudadano. En términos generales podríamos afirmar que la pérdida de gobernabilidad se debe al propio deterioro institucional. Este deterioro se explica entre otras razones por: (1) una baja preocupación por los asuntos públicos colectivos por lo que las entidades públicas trabajan con una mirada focalizada por el interés propio dejando a un lado su pertinencia para lograr resultados a nivel de país; (2) una planificación desarticulada entre los niveles del estado y las municipalidades a pesar de que se pretende hacer creer a los ciudadanos que existe un plan de país; (3) protagonismos individuales e institucionales que se manifiestan en acciones individualistas que ejercen algunos funcionarios públicos sobre la direccionalidad de políticas y estrategias institucionales; (4) el interés por adelantar agendas del partido político por sobre el interés público; (5) desconfianza en las instituciones debido a los niveles de corrupción, baja capacidad técnica de las instituciones para ejercer las competencias organizativas que le delega su ley orgánica.

Reflexiones finales

Para atender esta realidad los estudios de investigación y la plataforma pedagógica del Centro de Gobernanza han permitido identificar las fortalezas, limitaciones, desafíos y oportunidades y las áreas específicas a atender para el desarrollo estratégico del País y de las capacidades institucionales y directivas necesarias para potenciar los cambios. En este contexto, el Dr. Luis Aguilar Villanueva en la Cátedra Magistral 2015 del CGPC propuso un conjunto de capacidades a trabajar para la mejora de la gobernanza:

**Capacidades institucionales, fiscales,
Políticas y cognoscitivas
Gobernanza pública**

- Institucionalidad y honestidad directiva y administrativa:
No Corrupción, No Discrecionalidad y Parcialidad.
- Transparencia y Rendición de Cuentas sobre decisiones y acciones.
- Exigencia de finanzas públicas equilibradas, administración tributaria eficaz y costo-eficiencia operativa.
- Capacidad de coordinación y cooperación intra e intergubernamental.
- Capacidad de análisis, diseño e implementación de PP: información y conocimiento causal.
- Capacidad de gestión de organizaciones, procesos y personal.
- Capacidad de Interlocución y Asociación con la ciudadanía + Instituciones de participación ciudadana.

Fuente Dr. Luis Aguilar Villanueva, Cátedra Magistral 2015 CGPC

Para avanzar en la mejora de estas capacidades de la gobernanza pública es apremiante instituir los siguientes principios claves: un marco institucional coherente, transparencia y rendición de cuentas en las operaciones; capacidad directiva y técnica del gobierno para gestionar e implantar políticas públicas de crecimiento económico y desarrollo social; y premisas claras que sirvan de guía para adelantar la competitividad económica y la prosperidad del País y para erradicar la corrupción. Hay que exigirle cuentas al gobierno de su gestión y fiscalizar el uso prudente y transparente de los recursos fiscales. Si no se fortalece la gobernanza nuestros sueños y metas como pueblo de alcanzar la prosperidad y el bienestar de la sociedad serán inalcanzables.

El gobierno que se olvida de satisfacer los intereses generales de la sociedad para dedicarse a atender los intereses de unos pocos abriendo espacios para la corrupción simplemente es un mal gobierno. Tenemos que aprender a hacer las cosas mejor a través de sistemas de gobernanza en redes de actores diversos de la sociedad para generar inteligencia institucional y valor público. Urge atender las debilidades que experimentan nuestras instituciones en todos los sectores: la educación, el desarrollo económico, la creación de empleos, la seguridad pública, el sistema de justicia e integridad, la salud, la infraestructura, las carreteras y el urbanismo para encaminar la verdadera recuperación del País y potenciar el bien común de la sociedad. La coyuntura histórica exige que todos en la sociedad desempeñemos nuestro rol como agentes de cambio en beneficio de las próximas generaciones.

Los vientos son favorables para encausar el rumbo del País, tomar decisiones y articular respuestas que nos muevan al sendero de la calidad de vida y la prosperidad. Nuestra gente tiene claro qué país quiere solo hay que definir acciones concretas que nos lleven a ese rumbo e impulsarla. El desafío es trabajar y construir juntos el Puerto Rico que soñamos.

Diciembre 2018